



Proceso	Ejecutivo
Demandante	Megliatex s.a.
Demandado	Enviro Export Group S.A.S.
Radicado	No. 05001-31-03-013-2017-00490-01
Instancia	Segunda
Procedencia	Juzgado 2º Civil del Circuito de Ejecución de Medellín
Asunto	Interlocutorio No. 153
Decisión	Confirma
Tema	Desistimiento tácito
Subtemas	Interrupción de los términos previstos en el art. 317 del C. General del Proceso para el desistimiento tácito. Terminación del proceso por desistimiento tácito. Jurisprudencia.

TRIBUNAL SUPERIOR

SALA SEGUNDA DE DECISIÓN CIVIL

Medellín (Ant.), catorce de noviembre de dos mil veintitrés

I. OBJETO

Se decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra el auto proferido por el **JUZGADO TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO DE EJECUCION**, el 28 de agosto de este año, por medio del cual dio por terminado por

desistimiento tácito el proceso ejecutivo instaurado por **MAGLIATEX S.A.** en contra de **ENVIRO EXPORTH GROUP S.A.S.**

II. ANTECEDENTES

El veintiocho de agosto último, el JUZGADO TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO DE EJECUCION, decretó la terminación del proceso por desistimiento tácito, levantó las medidas ejecutivas y ordenó el desglose de los documentos que sirvieron como soporte para el recaudo ejecutivo, teniendo en cuenta que la sentencia ordenando seguir adelante con la ejecución se profirió el 14 de diciembre del año 2018 y la última actuación data del 27 de febrero del 2019.

Contra esta decisión, la parte demandante interpuso el recurso de reposición y, en subsidio, apelación, argumentando que ha sido proactiva a lo largo del proceso en lograr la efectividad de las medidas cautelares decretadas por el Juzgado y en ubicar nuevos bienes en cabeza del demandado que permitan la satisfacción del crédito; es así, como la representante judicial ha intentado verificar la existencia de nuevas cuentas bancarias que pudieran permitir la solicitud de nuevas medidas cautelares, para lo cual ha llevado a cabo las siguientes actuaciones, en forma posterior a la que el Juzgado identifica como ultima; al efecto, indica que el 18 de abril de 2021, remitió nuevamente por correo el oficio No. 1795, para obtener información sobre los productos financieros de los demandados; oficio que envió de nuevo el 22 de abril de 2021; el 27 de julio de 2021, volvió a remitir el oficio 1795, a través del portal de Tranunion, con el fin de obtener

información sobre los productos financieros y, el 27 de enero de 2023, intentó a través de Data Crédito la búsqueda de otras bases de datos, para hallar otros productos financieros que pudieran ser embargados.

Pese a tales búsquedas no ha sido posible lograr la satisfacción del crédito, por causas que no le son imputables a la demandante ni a su apoderada judicial; conservando la legítima esperanza de lograrlo, pues a la fecha se encuentran perfeccionadas las medidas cautelares contenidas en los oficios 1793, dirigido a Bancolombia y radicado el pasado 14 de noviembre de 2017 y el 1794, dirigido a BBVA, radicado el pasado 16 de noviembre de 2017, mismos que en cualquier momento pueden dar sus frutos; por último, puntualiza que no es justo que ante la probada insolvencia de los deudores y la legítima expectativa del acreedor, se le sancione con la terminación del proceso, cuando no ha sido negligente o descuidada; al contrario ha sido acuciosa porque ha sido ella la que se ha ocupado directamente del trámite de los oficios librados, en vez de solicitar al Despacho que los tramite con el fin de no provocar mayor congestión judicial.

Por auto del 29 de septiembre de este año, negó el recurso de reposición y, en subsidio, concedió el de apelación. Al efecto, indica que no es de recibo los argumentos de la recurrente porque en el expediente se observa que estuvo inactivo por más de dos años, contados desde el 27 de febrero de 2019, última actuación a través de la cual se avocó conocimiento, sin que se hayan presentado peticiones posteriores tendientes a interrumpir el término del art. 317 del C. General del Proceso; en cuanto a las gestiones realizadas con miras a

encontrar bienes de la demandada para solicitar medidas ejecutivas, no fueron puestas de presente al Juzgado; a lo que agrega, que por la etapa en la que se encontraba el proceso, se podía impulsar con otras actuaciones relevantes, como con la liquidación del crédito, la que no se avizora; igualmente, indica que tampoco se tiene noticias sobre la insolvencia de la demandada; precisa que lo que se busca con la sanción es evitar la parálisis del proceso, para cuyo cometido cita la Sentencia de constitucionalidad C-173 de 2019.

III. CONSIDERACIONES

El desistimiento tácito. La figura del desistimiento tácito la regula el art. 317 del C.G.P., para el caso en específico el numeral 1. La preceptiva dispone:

“El desistimiento tácito se aplicará en los siguientes eventos:

“1. Cuando para continuar con el trámite de la demanda, del llamamiento en garantía, de un incidente o de cualquiera otra actuación promovida a instancia de parte, se requiera el cumplimiento de una carga procesal o de un acto de la parte que haya formulado aquella o promovido estos, el juez le ordenará cumplirlo dentro de los treinta (30) días siguientes mediante providencia que se notificará por estado.

“Vencido dicho término sin que quien haya promovido el trámite respectivo cumpla la carga o realice el acto de parte ordenado, el juez tendrá por desistida tácitamente la

respectiva actuación y así lo declarará en providencia en la que además impondrá condena en costas.

"El juez no podrá ordenar el requerimiento previsto en este numeral, para que la parte demandante inicie las diligencias de notificación del auto admisorio de la demanda o del mandamiento de pago, cuando estén pendientes actuaciones encaminadas a consumir las medidas cautelares previas.

"2. Cuando un proceso o actuación de cualquier naturaleza, en cualquiera de sus etapas, permanezca inactivo en la secretaría del despacho, porque no se solicita o realiza ninguna actuación durante el plazo de un (1) año en primera o única instancia, contados desde el día siguiente a la última notificación o desde la última diligencia o actuación, a petición de parte o de oficio, se decretará la terminación por desistimiento tácito sin necesidad de requerimiento previo. En este evento no habrá condena en costas o perjuicios a cargo de las partes.

"El desistimiento tácito se regirá por las siguientes reglas:

"a) Para el cómputo de los plazos previstos en este artículo no se contará el tiempo que el proceso hubiese estado suspendido por acuerdo de las partes;

"b) Si el proceso cuenta con sentencia ejecutoriada a favor del demandante o auto que ordena seguir adelante la ejecución, el plazo previsto en este numeral será de dos (2) años; (negrillas y subrayas fuera de texto)

"c) Cualquier actuación, de oficio o a petición de parte, de cualquier naturaleza, interrumpirá los términos previstos en este artículo;

"d) Decretado el desistimiento tácito quedará terminado el proceso o la actuación correspondiente y se ordenará el levantamiento de las medidas cautelares practicadas;

"e) La providencia que decrete el desistimiento tácito se notificará por estado y será susceptible del recurso de apelación en el efecto suspensivo. La providencia que lo niegue será apelable en el efecto devolutivo;

"f) El decreto del desistimiento tácito no impedirá que se presente nuevamente la demanda transcurridos seis (6) meses contados desde la ejecutoria de la providencia que así lo haya dispuesto o desde la notificación del auto de obediencia de lo resuelto por el superior, pero serán ineficaces todos los efectos que sobre la interrupción de la prescripción extintiva o la inoperancia de la caducidad o cualquier otra consecuencia que haya producido la presentación y notificación de la demanda que dio origen al proceso o a la actuación cuya terminación se decreta;

"g) Decretado el desistimiento tácito por segunda vez entre las mismas partes y en ejercicio de las mismas pretensiones, se extinguirá el derecho pretendido. El juez ordenará la cancelación de los títulos del demandante si a ellos hubiere lugar. Al decretarse el desistimiento tácito, deben desglosarse los documentos que sirvieron de base para la admisión de la demanda o mandamiento ejecutivo, con las constancias del

caso, para así poder tener conocimiento de ello ante un eventual nuevo proceso;

"h) El presente artículo no se aplicará en contra de los incapaces, cuando carezcan de apoderado judicial." (Negrillas fuera del texto).

El caso concreto. En esencia, la inconformidad de la parte demandante con la decisión adoptada por el Juzgado de primer grado, radica en que ha sido diligente en la búsqueda de bienes del deudor para solicitar nuevas medidas ejecutivas para lograr el pago de la obligación; para lo cual, ha remitido en varias oportunidades los oficios de embargo a sus destinatarios; que no es justo que ante la insolvencia de los deudores y la legítima expectativa del acreedor, se le sancione con la terminación del proceso, cuando no ha sido negligente o descuidado.

Sobre las actuaciones que son idóneas para interrumpir el término establecido para que tenga lugar el desistimiento tácito, la jurisprudencia patria ha señalado:

"Entonces, dado que el desistimiento tácito» consagrado en el artículo 317 del Código General del Proceso busca solucionar la parálisis de los procesos para el adecuado funcionamiento de la administración de justicia, la «actuación» que conforme al literal c) de dicho precepto «interrumpe» los términos para que se «decrete su terminación anticipada», es aquella que lo conduzca a «definir la controversia» o a poner en marcha los «procedimientos» necesarios para la satisfacción de las prerrogativas que a través de ella se pretenden hacer valer.

“En suma, la «actuación» debe ser apta y apropiada y para «impulsar el proceso» hacia su finalidad, por lo que, «[s]imples solicitudes de copias o sin propósitos serios de solución de la controversia, derechos de petición intrascendentes o inanes frente al petitum o causa petendi» carecen de esos efectos, ya que, en principio, no lo «ponen en marcha» (STC4021-2020, reiterada en STC9945-2020).

“Ahora, lo anterior se predica respecto de los dos numerales de la norma comentada, ya que además que allí se afirma que el «literal c» aplica para ambos, mediante los dos se efectivizan los principios de eficacia, celeridad, eficiencia, lealtad procesal y seguridad jurídica. No obstante, dado que prevén hipótesis diferentes, es necesario distinguir en cada caso cuál es la «actuación eficaz para interrumpir los plazos de desistimiento».

“Como en el numeral 1º lo que evita la «parálisis del proceso» es que «la parte cumpla con la carga» para la cual fue requerido, solo «interrumpirá» el término aquel acto que sea «idóneo y apropiado» para satisfacer lo pedido. De modo que si el juez conmina al demandante para que integre el contradictorio en el término de treinta (30) días, solo la «actuación» que cumpla ese cometido podrá afectar el cómputo del término.

“En el supuesto de que el expediente «permanezca inactivo en la secretaría del despacho, porque no se solicita o realiza ninguna actuación (...) en primera o única instancia», tendrá dicha connotación aquella «actuación» que cumpla en el

«proceso la función de impulsarlo», teniendo en cuenta la etapa en la que se encuentre y el acto que resulte necesario para proseguirlo.

"Así, el impulsor de un declarativo cuyo expediente ha estado en la «secretaría del juzgado» por un (1) año sin emplazar a uno de los herederos del extremo demandado, podrá afectar el conteo de la anualidad con el «emplazamiento» exigido para integrar el contradictorio.

"Si se trata de un coercitivo con «sentencia o auto que ordena seguir adelante la ejecución», la «actuación» que valdrá será entonces, la relacionada con las fases siguientes a dicha etapa, como las «liquidaciones de costas y de crédito», sus actualizaciones y aquellas encaminadas a satisfacer la obligación cobrada (...)" {SALA DE CASACIÓN CIVIL, CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sentencia STC-111912020, del 09 de diciembre de 2020, M.P. Dr. Octavio Augusto Tejeiro Duque}.

Consecuente con lo anterior, se advierte que las gestiones realizadas por la parte demandante con miras a obtener información sobre bienes de la parte demandada para solicitar medidas ejecutivas, por si solas no son idóneas para interrumpir el término de dos años de inactividad, para que tenga lugar el desistimiento tácito; máxime si se tiene en cuenta que de las mismas no realizaron a través del estrado judicial, ni obra constancia en el expediente, como lo precisó el Juzgado de primer grado, quien además advirtió que ni siquiera ha hecho gestiones para la liquidación del crédito, de donde la última actuación que obra en el proceso, data del 17 de febrero de 2019, estando más que superado el término de

dos años (2) de inactividad para la terminación del proceso por desistimiento tácito.

Acorde con lo anterior, se impone la confirmación del auto recurrido, sin que haya lugar a condena en costas en segunda instancia porque no se causaron.

Conclusión: De conformidad con el anterior análisis, se CONFIRMARÁ la decisión tomada en primera instancia.

A mérito de lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELÍN, SALA UNITARIA DE DECISIÓN CIVIL,**

IV. RESUELVE:

- 1. CONFIRMAR** el auto de fecha y procedencia indicadas, por lo dicho en la parte considerativa.
- 2.** No hay lugar a condena en costas.
- 3.** Devuélvase el expediente a su lugar de origen, para que se surta el trámite correspondiente.

NOTIFÍQUESE

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luis Enrique Gil Marín', with a long horizontal stroke extending to the right.

LUIS ENRIQUE GIL MARÍN
MAGISTRADO